

El Gobierno pagará 2.500 millones si el IPC llega en noviembre al 3,5%

La revisión de las pensiones costará al Estado 25.000 millones de euros

La actualización de las pensiones este año costará en torno a los 2.500 millones de euros, si el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual se mantiene en el 3,5% al finalizar noviembre. Pero dado que esta cantidad de dinero habrá de consolidarse en las cuantías de las pensiones para siempre, el coste de este simple ejercicio obligado por la ley de actualizar a fin de este año las pensiones puede superar los 25.000 millones.

CINCO DÍAS Madrid

Fuentes del Gobierno estiman que la inflación podría cerrar el mes de noviembre incluso por encima de donde está ahora (3,5%), puesto que consideran que el impacto de la fuerte subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el índice de precios no ha concluido. Se supone que el IPC recogió ya en septiembre un impacto de unas ocho décimas por la subida del citado impuesto.

Pero dado que no todos los precios experimentaron la subida en septiembre por la debilidad de la demanda, lo harán en los meses siguientes a la subida legal (1 de septiembre), e irán incorporándose al IPC paulatinamente. Los expertos no descartan que el impacto lleve el índice de precios hasta una tasa

interanual en los próximos meses del 4% o muy cercana.

Pero dado que ahora el Índice está en el 3,5%, los cálculos que podemos hacer sobre el coste de la revalorización de las pensiones deben limitarse a tal nivel. Así, dado que el coste anual de la nómina de las pensiones es de unos 100.000 millones de euros, una desviación de 2,5 puntos (las pensiones ya habían subido un 1% en enero por decisión del Ejecutivo), tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros, que se abonarán a lo largo del primer trimestre del año que viene, tal como dice la norma que Mariano Rajoy asegura que cumplirá.

Tal cantidad debe compu-

El abono de este año, esos 2.500 millones, aportará 0,25 puntos de déficit

tarse para determinar la nueva cuantía de la pensión con la que cada pensionista inicia el año 2013, para a posteriori efectuar la subida del 1% que también para ese año ha dictaminado el Gobierno en la Ley de Presupuestos, que aun está en trámite parlamentario.

Pero lo cierto es que como la actualización de acuerdo con el IPC de las pensiones se consolida en la nómina de la Seguridad Social, ha de pagarse cada ejercicio a cada pensionista hasta su fallecimiento. Un cálculo simple permite aventurar que, dado



Dos jubilados pasean por un parque. BLOOMBERG

que la vida media de las pensiones de jubilación es de unos 18 años, el número medio de años que habrá que abonarse esta cantidad de 2.500 millones es de nueve. Nueve es la media entre los dieciocho años que estarán en el sistema los pensionistas que cobrarán la pensión por vez primera y un año que como máximo estarán los que fallezcan en 2013.

Revalorización

Por tanto, en esos nueve años la revalorización de las pensiones por la desviación del IPC de este único ejerci-

cio costará al Estado, a la Seguridad Social, 25.000 millones de euros. Nada menos que 2,5 puntos del producto interior bruto (PIB) actual, aproximadamente todo el esfuerzo de consolidación fiscal exigido durante este año con recortes en los gastos y subidas de los impuestos a la ciudadanía.

El simple abono este año, esos 2.500 millones de euros, aportará 0,25 puntos de déficit, una desviación que puede desbaratar los esfuerzos del Gobierno por cumplir el 6,3% de desequilibrio exigido por Bruselas para este

ejercicio. Por ello, aunque el Gobierno insiste en abonarlo porque lo dice la legislación, bien podría dar marcha atrás a última hora si hubiere ya desviación en el déficit que se abultase excesivamente con los 2.500 millones citados.

Lo que si parece claro es que las autoridades europeas han advertido al Ejecutivo de la necesidad de corregir este mecanismo de revalorización por el componente multiplicador que tiene en el gasto público. El Gobierno ha tomado nota y hará propuestas para modificarlo desde 2013.

Lagarde advierte de que ningún país es inmune a la crisis

EFE Madrid

La directora del FMI, Christine Lagarde, afirmó ayer que "nadie es inmune a la situación actual de incertidumbre", en alusión a los países de América Latina. "Latinoamérica no debe olvidar que todos estamos fuertemente interconectados y somos muy interdependientes, bien se trate de países proveedores de materias primas o maquinaria o que sean parte de la cadena productiva", indicó Lagarde al diario *El Mercurio*.

La directora del FMI recalcó que "todos estamos interconectados y nadie es inmune a la situación actual de incertidumbre". Lagarde reconoció que los países latinoamericanos están marchando a buen ritmo y fueron parte de los motores de crecimiento, como parte de las economías emergentes. No obstante, aseguró que "lo seguirán siendo, pero a un ritmo más lento, porque hay una desaceleración global. Así que el imperativo es mantener los amortiguadores y asegurarse de tener suficiente margen fiscal para actuar en caso de que las cosas empeoren".

La responsable del FMI advirtió de los problemas económicos que se están gestando en EE UU. Lagarde sostuvo que de no llegarse a un acuerdo para elevar el límite de deuda permitido, la ley obligaría al Gobierno de ese país a aplicar un recorte del déficit fiscal por un 4% del PIB del próximo año, lo que podría restar hasta dos puntos porcentuales de crecimiento al país. Por el contrario, Lagarde señala que el FMI es más optimista sobre la evolución de China.

Los sindicatos vuelven a salir a la calle contra los presupuestos

UGT y CC OO convocarán huelga general el mes que viene si los recortes no se someten a una consulta popular

CINCO DÍAS Madrid

Miles de personas salieron ayer a la calle en más de 50 ciudades, secundando las reivindicaciones de la Cumbre Social, auspiciada por CC OO y UGT, que dejaron "en manos del Gobierno" la convocatoria de una huelga general en noviembre si los recortes no se someten a una consulta popular. Además de CC OO y UGT, la Cumbre Social integra más de 150 organizaciones, como el sindicato de funcionarios CSI-F, la

Unión Sindical Obrera (USO) o asociaciones de educación, sanidad e inmigración.

En este contexto, los responsables sindicales insistieron en destacar sus posiciones. En una rueda de prensa previa a las marchas, los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, resaltaron que la convocatoria de un paro general depende del Gobierno, porque es quien tiene en su mano sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Méndez afirmó que los sindicatos "insistirán hasta la saciedad" para que se consulte a la ciudadanía sobre "el camino" escogido para salir de la crisis que, en su opinión, es "un camino de perdición".

Además, el secretario general de UGT aseguró que "aunque el Gobierno no lo diga, todo el mundo sabe que las pensiones se van a tocar", puesto que no se revalorizarán tal y como establece la ley de la Seguridad Social.

A su vez, Toxo exigió que se convoque un referéndum



Grupos de manifestantes en las movilizaciones convocadas por los sindicatos que tuvieron lugar ayer en Madrid. REUTERS

sobre los recortes antes de que la situación social se vuelva "explosiva e insostenible".

Asimismo, el máximo responsable de CC OO dijo que los sindicatos españoles pondrán a la Confederación

Europea de Sindicatos una "jornada de acción europea" en la reunión que del próximo día 16.

A la espera de nuevos acontecimientos, las marchas se repitieron ayer en

todo el territorio nacional para protestar contra la política económica del Gobierno y contra el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 que, según la plataforma, "está al servicio de la banca".

La manifestación de Madrid discurrió entre la plaza de Legazpi y Atocha y a ella se sumaron, según los convocantes, 72.000 personas. En Barcelona, las capitales de Castilla y León, las capitales andaluzas, Murcia, Vitoria, Bilbao, Pamplona, Palma de Mallorca y Gijón, entre otras ciudades, se repitieron las movilizaciones. En Galicia, las manifestaciones serán hoy aunque, según explicó Toxo, las delegaciones provinciales del Gobierno en Pontevedra y Orense "han prohibido" las movilizaciones alegando que coinciden con la campaña electoral.